

EL PARTIDO
COMUNISTA
ANTE LOS
PROBLEMAS
AGRARIOS
HOY

PRIMER TRIMESTRE 1967

SUPLEMENTO AL N° 53 DE



HOY
AGRARIOS
PROBLEMAS
ANTE LOS
COMUNISTA
EL PARTIDO

MINISTERIO
DE CULTURA



La incorporación de los campesinos a la lucha por la democracia

En los últimos cinco años, un millón de trabajadores han tenido que abandonar la tierra. Entre ellos, junto con los obreros agrícolas sin trabajo, había cientos de miles de campesinos, labradores de toda su vida, a quienes se ha ido arruinando poco a poco, hasta hacerles vender sus parcelas, destrozarse sus hogares y marcharse a la aventura en busca de trabajo a las ciudades o por el extranjero.

Al mismo tiempo que el campo se despuebla la agricultura se ha convertido en el primer problema económico de España.

Desde siempre, el campo se había bastado y se había sobrado para abastecer el mercado nacional. Ahora, después de treinta años de franquismo, cada vez tenemos que comprar fuera más productos agrícolas.

En 1966 ha habido que gastar, para importar productos agrícolas, 52.000 millones de pesetas. Esta es una cantidad tan elevada que para muchos resulta difícil, incluso, imaginársela. Para darse cuenta de su importancia, basta saber que representa cuatro veces y media más que todo lo que el Gobierno ha invertido, en el campo español, por todos los conceptos, en el mismo año.

De esta forma, los recursos que se niegan a nuestra agricultura y a nuestros campesinos sirven para subvencionar la agricultura de otros países. Pero hay que decir que estas importaciones que arruinan al campo, sirven para que realicen grandes negocios un puñado de compañías monopolistas que cuentan con el respaldo de la Comisaría General de Abastecimientos.

En 1966, se han importado casi dos millones de toneladas de maíz, cuando en nuestra tierra podría producirse

todo el maíz que fuera necesario. La consecuencia es que, en los últimos tres años, ha disminuido la superficie dedicada a este cultivo.

Las importaciones de algodón y de lana han representado 4.900 millones de pesetas. Mientras tanto, los dos últimos cortes de lana de la cabaña española están sin vender, el cultivo algodonero está en decadencia y al labrador se le pagará el algodón, si es que se le paga, a un precio más bajo que el año pasado. Con ese dinero, se podría haber terminado completamente el Plan de riegos del Bajo Guadalquivir, o el Plan de los Monegros o más de la mitad de todo el Plan de Tierra de Campos, que redimiría a gran parte de Castilla.

Se han importado 125.000 toneladas de carne y la consecuencia es que se ha hundido el precio de la carne de cerdo y han bajado el de vacuno, el lanar y el de las aves, sin que, por otra parte, se hayan enterado los consumidores, que pagan precios cada vez más altos.

Suben todos los precios de manera escandalosa. Ni buscando con una lupa puede encontrarse un solo producto de los que compran los agricultores que haya bajado una peseta. Los únicos precios que bajan son los que perciben los campesinos por sus productos. Y los que no bajan, como el trigo, el arroz, la remolacha y otros, están bloqueados desde hace años. Lo que no sube, cuando todo aumenta a su alrededor, es lo mismo que si bajara.

¿Cómo explicar esta situación de la agricultura? ¿Cómo explicar que la vida para el campesino se haga más difícil cada año; que hoy no puedan vivir del campo, de sus haciendas, ni siquiera los campesinos que en otros tiempos eran ricos y vivían desahogados? A los campesinos se les quiere convencer de que las cosas tienen que ser así y que sus males no tienen remedio. Se trata de hacerles creer que, de todas formas, están condenados y que, cuanto antes se marchen del campo, será mejor.

La situación del campo no es el fruto de ninguna fatalidad, de ninguna calamidad. Es la consecuencia inevitable de la política agraria del régimen franquista.

Esa política es profundamente anticampesina; está dirigida contra todos los que cultivan la tierra y en beneficio del capital monopolista, de los grandes Bancos, de las grandes empresas industriales de la oligarquía y del

puñado de terratenientes que de campesinos no tienen nada, pero que conservan el derecho feudal a llevarse del campo la renta que el campo produce y que sería necesaria para que los campesinos puedan vivir y para que la agricultura salga de su atraso.

Urge una profunda reforma agraria basada en el principio: "La tierra para quienes la trabajan".

El principal problema de nuestra agricultura es el de la mala distribución de la propiedad de la tierra y la medida fundamental para resolverlo es una profunda reforma agraria que entregue la tierra a quienes la trabajan y ponga a disposición de los campesinos los medios técnicos y financieros necesarios para cultivarla racionalmente.

Nadie niega hoy la necesidad de la transformación de nuestras estructuras agrarias, pero la cuestión fundamental es la de saber en beneficio de quién y a costa de quién hay que realizar dichas transformaciones.

Los representantes de los terratenientes y de los monopolios capitalistas entienden por "transformación de estructuras" un conjunto de medidas técnicas que mantengan prácticamente intacta la propiedad latifundista. Esa "transformación" debe hacerse, según ellos, a costa de los campesinos y de todo el país. Se trata no de cambiar, sino de continuar la política seguida por el régimen franquista, causante de la crisis, el marasmo y la desolación de nuestra agricultura.

Hay que decir que en los últimos tiempos, los intentos de escamotear la necesidad de la reforma agraria, colocando en un primer plano el problema del minifundio, han recibido un duro golpe.

El hecho mismo de que hoy se plantee en todo el ámbito nacional la necesidad de la transformación completa del campo, es la mejor prueba de que el camino seguido hasta aquí ha fracasado. La prueba irrefutable

de que el franquismo, por su propia naturaleza de clase, es incapaz de resolver este grave problema nacional.

Esperar que sean los propios latifundistas quienes transformen la agricultura, es creer en lo imposible. Durante siglos han tenido en sus manos las tierras y el Poder y no han sido capaces de crear una agricultura moderna. Su espíritu "transformador" se reduce a pedir que esas tierras que mantienen mal cultivadas o en completo abandono, sean revalorizadas con los dineros del país. Lo mismo puede decirse del capital monopolista, cuyos tentáculos han penetrado en la agricultura sin desarrollar otra cosa que sus propios beneficios, extraídos de la expoliación de los agricultores.

Frente a esa vía reaccionaria, cuyas catastróficas consecuencias son evidentes, está la vía antifeudal y antimonopolista, defendida por los comunistas y otras fuerzas democráticas: la auténtica transformación de las estructuras del campo mediante una profunda reforma agraria basada en el principio: "La tierra para el que la trabaja."

Se trata de acabar con la injusticia que representa el que haya, de un lado, tantas tierras mal cultivadas e incluso abandonadas; y, de otro, cientos de miles de obreros agrícolas y campesinos que necesitan esas tierras para vivir. Se trata de poner término a los residuos medievales en virtud de los cuales cientos de miles de arrendatarios y aparceros, que se cuentan entre los mejores y más capaces agricultores, tengan que cultivar tierras que no son suyas y por las que han de pagar elevadas rentas a los terratenientes parasitarios. Se trata, al mismo tiempo, de romper el principal obstáculo con que ha tropezado y sigue tropezando el desarrollo económico de nuestro país.

España necesita un campo próspero, con métodos modernos de producción, industrialización y comercialización de sus productos; con un elevado consumo de fertilizantes; con semillas seleccionadas; con una ganadería altamente productiva y con la ayuda técnica, científica y financiera del Estado. La prosperidad del campo sólo podrá lograrse con la participación activa de los obreros agrícolas y de los campesinos, es decir, de los verdaderos agricultores. La transformación de nuestra agricultura debe ser realizada en favor de los campesinos y a costa de la minoría latifundista y monopolista.

Evidentemente el régimen actual se opone y seguirá

oponiéndose a esta transformación. Pero ello no hace sino subrayar la necesidad de la lucha organizada y enérgica por la democracia de todas las fuerzas antifeudales y anti-monopolistas; lucha en la que ha de jugar un papel fundamental un amplio movimiento campesino de todos los que trabajan y viven de la agricultura y, en primer lugar, de los obreros agrícolas, de los arrendatarios y aparceros, de los colonos y de los campesinos carentes de suficiente tierra.

En las condiciones actuales, cuando la lucha de los trabajadores organizados en sus comisiones obreras, el empuje de las fuerzas democráticas, ha colocado al régimen a la defensiva y acentuado la descomposición de todos los organismos de poder de la dictadura, ese amplio movimiento campesino no sólo es posible, sino que ha empezado ya a desarrollarse.

Ningún sector campesino escapa a la crisis.

Por su importancia, queremos referirnos concretamente a algunos sectores fundamentales de los que depende la existencia de cientos de miles de campesinos.

Sector cerealista. — Nada demuestra con tanta claridad el fracaso de la política agraria como el balance de la economía cerealista, que es, hoy por hoy, la espina dorsal de nuestra producción agrícola y la riqueza principal de vastas zonas del país, que viven o languidecen según se presenta la cosecha cerealista.

Cerramos el año 1966 con unos sobrantes de trigo que ascienden a los 20 millones de quintales; sobrante que no encuentra mercado y que, en definitiva, tendrá que ser desnaturalizado para piensos, con una pérdida económica que los expertos cifran en unos 1.500 millones de pesetas.

Como es sabido, el comercio del trigo se halla en régimen de monopolio estatal; existe la obligación de vender al único comprador, al Servicio Nacional del Trigo que, entre otros muchos males, adolece de una carencia básica: no cuenta con la capacidad suficiente para recibir y alma-

cenar el trigo que produce el país. Este hecho agrava las dificultades de las economías cerealistas modestas, obligadas a malbaratar sus granos por falta de almacenes y recursos económicos. Ello, sin contar con los infinitos abusos y prácticas fraudulentas bien conocidos a los que se libra el Servicio Nacional del Trigo, frente al cual, el campesino, individualmente, no tiene ninguna defensa.

Está demostrado que los precios de sostén, tal como hoy se practican, si bien benefician a los grandes terratenientes que pueden mecanizar sus explotaciones, no permiten vivir, ni siquiera salvarse de la ruina a los campesinos cerealistas. El Gobierno mantiene congelado el precio del trigo, sin que las pérdidas económicas que dicha medida provoca a la hacienda campesina sean compensadas ni con desgravaciones fiscales, ni con subvenciones o créditos fáciles y baratos, ni con ninguna otra clase de ayuda que evite el precipitado derrumbe de las economías trigueras. Desde 1958 hasta la fecha, han abandonado la siembra de trigo más de 450.000 familias.

No es menos grave la situación en que se encuentra la producción de los cereales de pienso. Crece verticalmente la importación de maíz mientras —a pesar del notable esfuerzo de técnicos nacionales que han producido excelentes híbridos adaptados a las diferentes zonas del país—, más de la mitad de la superficie ocupada por dicho cereal se sigue sembrando con semillas ordinarias, con todo lo que esto significa en pérdidas.

También es deficitaria la producción de cebada, de avena y de sorgo, mientras crecen las necesidades del país en dichos cereales.

Un dato ilustra mejor que nada la situación crítica creada por la política cerealista del franquismo: *la importación de cereales de pienso —en constante aumento— se ha convertido ya hoy en el segundo renglón de las importaciones del país, después del petróleo.*

Una conclusión aparece con toda evidencia: es preciso dotar al país de una política cerealista que, partiendo del fortalecimiento de la economía campesina, planificando y racionalizando la producción, asegure una sólida base cerealista nacional, completa y equilibrada, capaz de satisfacer las necesidades del consumo y del imprescindible desarrollo de la ganadería.

Una política cerealista racional permitiría, por añadidura, la aparición de una corriente estable de exportaciones, aprovechando las favorables condiciones climatológicas de nuestro país para la producción de trigos duros (especialmente los "ambar durum") tan apreciados en el mercado mundial y que disfrutaban de un precio muy superior al de otras clases.

Sector vitivinícola. — Una profunda crisis de superproducción azota la vitivinicultura nacional. Cada año, millones de hectólitros de vino se queman sin que esta costosa operación libere al mercado del peso de los excedentes ni, mucho menos, resuelva la crisis.

La actuación de la Comisión de Compras de Excedentes ha beneficiado, en lo fundamental, a los grandes bodegueros y a los especuladores. No sólo no se ha mantenido el precio de "sostén" —que, en realidad, es un precio de crisis, congelado desde hace lo menos ocho campañas—, sino que en amplias zonas se han pagado precios por la uva que, en ocasiones, representan la mitad del precio oficial. (Un informe de la C.O.S.A. de Toledo dice que en la actual campaña, "la comercialización de la uva se llevó a efecto al margen de los precios de garantía, siendo las cotizaciones más frecuentes las de 1,30 a 1,80 pesetas/kilo de uva".)

El retraso en la fecha de recepción del vino, la discriminación contra los campesinos viticultores, a los que se paga tarde y mal, abre un vasto campo para los especuladores. Sólo aquellos viticultores que han sabido unirse en cooperativas auténticamente campesinas, han podido resistir mejor a esta presión de la oligarquía financiera, sin que con ello, por supuesto, hayan resuelto todas sus dificultades.

Como balance de su política vitivinícola, el régimen prohíbe la plantación de vides e, incluso, prepara medidas para el arranque de cepas. Ya no basta con quemar el vino; son las cepas mismas las que deben ser arrancadas y no en unas cuantas hectáreas: se habla de 200.000. No se sabe qué es peor: el remedio o la enfermedad. En todo caso, es la confirmación de la incapacidad del régimen para sacar a la vitivinicultura de la crisis. Se trata, como siempre, de descargar sus consecuencias sobre los campesinos

más modestos. Es la suerte de 800.000 campesinos la que está en juego.

Sector ganadero. — No exageramos nada al señalar que la dictadura fascista parece empeñada en dejar al país sin ganadería.

Hoy, España cuenta con menos cabezas de ganado que hace treinta años ; pocos países del mundo y, desde luego, ninguno en Europa, presentan tan desastroso balance.

Y, sin embargo, también pocos países reúnen condiciones naturales tan ricas y variadas como las que tiene el nuestro para desarrollar su riqueza pecuaria. Desde hace muchos decenios, técnicos y economistas clarividentes han venido proclamando, con razón, que España estaba llamada a ser la reserva ganadera de Europa.

La gravedad de esta realidad no puede escapar a nadie, sobre todo, si se tiene en cuenta que, en nuestros tiempos, la medida de todo desarrollo agrario auténtico viene dada por el crecimiento primordial de la ganadería. Hoy, más que nunca, no hay un campo sano sin una ganadería poderosa.

Quizás en ningún otro sector del campo el desastre de una política incoherente de precios tenga tan graves consecuencias como en el sector ganadero; no hay desarrollo posible de la ganadería sin una firme política de precios remuneradores. Son las condiciones mismas del ciclo ganadero las que exigen la estabilidad y la rentabilidad en los precios.

En lugar de ello, la política de la dictadura, favorable a los intereses especulativos del capital monopolista, provoca un hundimiento periódico de los precios de los productos pecuarios. Ahora mismo estamos asistiendo a un espectacular hundimiento de los precios del cerdo, que han descendido en un año en un 50 %, mientras continúan subiendo los precios que pagan los consumidores por el mismo producto en las plazas del país.

Se produce igualmente una caída vertical en el precio de los corderos, pasando de 22,50 ptas/libra a 14,75. Los consumidores, como de costumbre, verán aumentar los precios en las carnicerías.

Sería largo seguir citando ejemplos que, además, son sobradamente conocidos. Ni siquiera el subsector de la avicultura, que es el que ha logrado un cierto desarrollo en los últimos años, goza de condiciones normales en cuanto a política de precios, debatiéndose desde hace años en depresiones periódicas que arruinan, periódicamente también, a multitud de avicultores.

Al mismo tiempo crecen con regularidad constante los precios del maíz, la alfalfa, la harina de pescado y, en general, todos los gastos de la hacienda ganadera. Debido a la ausencia de protección que sufre la ganadería, se perpetúan las enfermedades contagiosas, las epizootias endémicas que azotan la cabaña nacional y causan miles de millones de pesetas de pérdidas a las ya debilitadas economías campesinas.

¿Y qué hace el Gobierno? En los últimos tiempos, dos han sido las medidas fundamentales tomadas por la dictadura en respuesta a las justas reivindicaciones de los ganaderos; las dos confirman el carácter anticampesino de su política:

En primer lugar, la orden de 28 de marzo de 1966, introduciendo por primera vez en la legislación tributaria española el impuesto sobre la ganadería independiente que golpea, en primer término, a la modesta explotación campesina que es la que, generalmente, no tiene pastoreo para su ganado.

En segundo lugar, está la tan traída y llevada "acción concertada" para la ganadería bovina de carne, de la que comienzan a dudar hasta sus propios "beneficiarios". En efecto, hasta el presente, de las 910.000 explotaciones de ganado vacuno que hay en el país, ¡sólo unas 1.000 han visto legalizado su contrato de "acción concertada"!

La "acción concertada" está dirigida a favorecer al máximo a los grandes ganaderos, descartando desde un principio a la explotación ganadera campesina.

Al amparo de la "acción concertada" se están creando sociedades anónimas para la explotación de grandes rebaños. La primera constituida, la "Ganadera Internacional, S.A.", lo ha sido con capitales españoles, argentinos y americanos. Grupos tejanos se están instalando en el Sur del

país. Ultimamente, la "Illinois Produced International Inc.", de Estados Unidos, está negociando en Cuenca el establecimiento de una gigantesca explotación que abarcará unas 200.000 hectáreas, según informa la revista "Tria", de 15 de febrero de 1967.

Esta orientación ha sido reafirmada por el ministro de Agricultura, Díaz Ambrona, quien, refiriéndose al segundo "Plan de Desarrollo", ha puesto como ejemplo de dimensión óptima de las futuras explotaciones ganaderas, los latifundios extremeños.

En pocas palabras, la política del régimen provoca la ruina de la cabaña nacional y la liquidación de modestos ganaderos.

Frente a la "acción concertada" con los latifundistas y los grandes capitalistas agrarios, se impone una política nacional ganadera, que tenga como finalidad la protección y la ayuda a la hacienda ganadera campesina; que abarque todos los sectores de la cabaña y cubra todo el ciclo de producción pecuaria.

DONDEQUIERA que se vuelven los ojos en el campo es para descubrir el mismo panorama: problemas, problemas y más problemas.

El cultivo olivarero, uno de los de más vieja tradición en nuestro país, que podía ser emporio de riqueza en extensas regiones, está en abierta decadencia. (En Sevilla, alrededor de 100.000 hectáreas de olivar se consideran no rentables.) España es el primer país del mundo en la producción de aceite de oliva y, sin embargo, por parte del régimen no se ha prestado la más mínima atención ni a su cultivo, ni a su elaboración, ni a su comercialización y exportación. Por el contrario, esta gran riqueza nacional se ve cada día más comprometida por el consumo de aceites exóticos, cuya importación constituye fuente de grandes negocios para las empresas de la oligarquía.

El cultivo remolachero, con dificultad y sólo en los años buenos, recupera las cifras que se alcanzaron en la cosecha de 1952-53. La superficie de cultivo está limitada

y controlada; los precios permanecen congelados por largos periodos y siempre van con retraso en relación con los costes de producción; los campesinos remolacheros están atados de pies y manos frente a las compañías azucareras; el trust del azúcar dicta su ley en la calidad, en el peso, en la humedad, en la semilla, en los préstamos. La reglamentación de la campaña 1967-68 fija el pago de la remolacha por su contenido en azúcar; pero en tales condiciones que significan, en realidad, un zarpazo a los campesinos remolacheros, la inmensa mayoría de los cuales verán sus precios rebajados.

No más envidiable es la suerte de los campesinos algodoneros; indefensos, tanto frente a las desmotadoras de las concesionarias como frente a las pretendidas desmotadoras "cooperativas" que han montado los más grandes terratenientes. Los precios están, asimismo, congelados, cuando no en retroceso como ocurre este año. La superficie de cultivo disminuye (por ejemplo, en Sevilla se anuncia para este año una reducción del área sembrada en un 60 % en el de secano y un 40 % en el de regadío) y es cada día más difícil tener la certeza de que el algodón producido con tanto esfuerzo encuentre mercado.

Los cultivadores de tabaco, siervos de la poderosa compañía monopolista "Tabacalera, S.A.", a la que sirve de agente el Servicio Oficial del Tabaco, se ven ofrecer por su cosecha precios que, ya desde hace años, no son remuneradores; cuando no se ven arruinados en una campaña como consecuencia de las plagas, frente a las cuales el Estado no les presta ninguna asistencia.

La almendra y la avellana, sin precios de sostén ni remuneradores; el corcho, con precios que no pagan ni la saca; el esparto, en trance de definitiva liquidación; los concursos de corte de madera en los bosques y de resina en los pinares, desiertos por falta de licitadores. Todo ello representa, no sólo la decadencia de extensas zonas del país, que no tienen otra compensación económica, sino la inexistencia de millones de jornales que podrían aliviar la situación de los obreros agrícolas y contener el éxodo.

Incluso los cultivos de regadío, la agricultura privilegiada de España, conocen serias dificultades. Los agrrios, primer renglón de las exportaciones, se enfrentan con un angustioso problema de mercados. La dictadura, en 30 años de existencia no ha sabido conservar la plaza preponde-

rante que en muchos de ellos disfrutábamos, ni mucho menos conquistar otros nuevos que son imprescindibles para la creciente producción. Como consecuencia de las taras políticas del régimen, de la pervivencia del general Franco al frente de los destinos de España, los mercados de los países socialistas, que son en la actualidad los más prometedores, continúan jugando un papel insignificante. La competencia en los países de la Europa Occidental se hace cada día más encarnizada y vamos siendo batidos por otros países. La consolidación del Mercado Común y la posición que en su seno disfruta Italia ensombrece todavía las perspectivas. En estas condiciones, nuestros 100.000 cultivadores se ven sometidos a fuerte presión por parte del reducido grupo de grandes compañías exportadoras que imponen arbitrariamente los precios y las condiciones de venta. Todas las dificultades de mercados repercuten así, amplificadas por las especulaciones monopolísticas, sobre la hacienda campesina.

Los pequeños cultivadores no encuentran ningún apoyo por parte del Sindicato de Frutos que representa, ante todo, los intereses del comercio exterior y del reducidísimo grupo de empresas que lo controlan.

La misma incertidumbre afecta a los otros productos de la huerta: los tomates, las cebollas, las alcachofas, los plátanos, y las demás frutas, cuya calidad no la discute nadie, no tienen la menor protección en cuanto pasan la frontera, debido a la carencia total de una política nacional de defensa de nuestras exportaciones. Los mercados se abren o se cierran según el libre arbitrio de los países que nos compran y según lo que les dictan, en cada momento, sus propios intereses. En estas condiciones, no es posible asegurar, no ya el futuro, sino ni siquiera la consolidación de ningún cultivo.

Si a ello añadimos que el atraso general que padece todo el sistema de industrialización y comercialización de productos agropecuarios, tiene particular trascendencia para la agricultura de regadío; que el mercado interior está dominado por una plaga de intermediarios monopolistas de toda calaña; que los precios que se ven obligados a pagar los consumidores son de tres a cinco veces más altos que los que reciben los cultivadores, tendremos completado el panorama de total indefensión en que se encuentran los campesinos.

Reivindicaciones inmediatas de los campesinos

En las presentes condiciones los campesinos pueden conseguir, siquiera sea parcialmente, que algunas de sus reivindicaciones más acuciantes sean satisfechas, a condición de que su lucha alcance la necesaria amplitud.

Entre las reivindicaciones que con más insistencia vienen planteándose, destacan las siguientes, comunes a todos los sectores:

1 Precios firmes, remuneradores, para los productos agropecuarios, flexibles dentro de límites máximo y mínimo, que orienten durante un largo período la economía campesina y que aseguren la paridad entre los precios agropecuarios y los industriales.

Para asegurar esta vital exigencia del campo hay que terminar con la situación actual en la que los precios son fijados arbitrariamente por el Gobierno o por las compañías monopolistas. Los precios de los productos agropecuarios han de ser calculados teniendo en cuenta los costes de producción y el nivel de los precios pagados por los campesinos por los productos que adquiere y han de ser revisables periódicamente en función de la evolución de estos factores.

La fijación de los precios oficiales o de sostén ha de hacerse con la plena participación de los campesinos.

Desde hace cuatro años, el Gobierno viene prometiendo la creación del F.O.R.P.P.A (Fondo de Orientación y Regulación de Productos y Precios Agropecuarios). Ahora, ha sido enviado a las Cortes un proyecto en cuya elaboración los campesinos no han tenido arte ni parte. Así, es de pre-

ver que el F.O.R.P.P.A., que había despertado ciertas ilusiones entre los agricultores, no será otra cosa que un nuevo instrumento para continuar, como hasta ahora, la expropiación del campo.

En tanto un régimen democrático no transforme totalmente la situación de la agricultura, las condiciones de propiedad, de trabajo y de vida de los campesinos, se impone el establecimiento de primas no inferiores al 15 % para los productos de las explotaciones familiares. Un sistema de precios como el actual, que no tiene en cuenta los costes de los campesinos, más elevados que los de los terratenientes y los capitalistas, condena a las explotaciones campesinas a la desaparición. Es necesario, por consiguiente, un sistema de precios diferenciales, ya que un precio uniforme representa altos beneficios para una pequeña minoría de terratenientes y resulta no remunerador para la inmensa mayoría de los campesinos.

No será posible asegurar precios estables y remuneradores para el campo, mientras se sigan utilizando las importaciones —bajo el pretexto de defender la estabilidad y de proteger a los consumidores— como un arma fundamentalmente anticampesina. Las importaciones, manejadas por las compañías monopolistas ligadas a la Comisaría General de Abastecimientos, no impiden que sigan subiendo los precios al consumidor, pero sí consiguen hundir los precios a la producción y arruinar al campo.

Para que las importaciones sean un complemento y un estímulo al desarrollo de nuestra propia agricultura hace falta que sean decididas con la plena participación de los campesinos, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

2 *Lucha contra los intermediarios monopolistas que explotan al mismo tiempo a los campesinos y a los consumidores.*

Ello exige que las comisiones campesinas elegidas libremente puedan intervenir eficazmente para impedir los abusos a los que se libran ininterrumpidamente los monopolios oficiales y privados: la Comisaría General de Abastecimientos; Servicio Nacional del Trigo; Sindicatos Nacionales de Productos Agrícolas; Mercados Nacionales y Centrales Hortifrutícolas; fábricas de azúcar; desmotadoras

de algodón; Red del Frío y Mataderos Industriales; Centrales Lecheras, etc.

Requiere, también, la ayuda y el respaldo financiero del Estado para que las cooperativas campesinas puedan tomar en sus manos, en el mayor grado posible, la industrialización y comercialización de los productos del campo.

3 *Por un auténtico movimiento cooperativo campesino.*

El movimiento cooperativo, para ser auténtico, exige y necesita la democracia. Se impone, pues, la lucha por un movimiento de cooperativas campesinas, democrático, independiente del Estado y de los Sindicatos verticales; la abolición de la Ley de Cooperación de 1942, que debe ser sustituida por una nueva Ley en cuya elaboración participen directamente los campesinos cooperativistas y que asegure la plena soberanía de la Asamblea, respetando el principio de "cada socio un voto"; la liquidación de la línea de mandos encabezada por Domingo Solís; la elección democrática de todos los dirigentes en el plano local, provincial y nacional.

4 *Exoneración completa de impuestos a la explotación familiar campesina y disminución de la presión tributaria que pesa sobre el campo.*

Las explotaciones agrícolas y ganaderas, cuyos ingresos no excedan de lo que debe ser considerado como salario familiar, han de ser inmediata y totalmente liberadas de impuestos y gravámenes de todo tipo. No es tolerable que, en tanto que las empresas monopolistas y las grandes fortunas disfrutan de toda clase de exoneraciones y reducciones tributarias, los ingresos que constituyen el mínimo vital de la familia campesina se vean reducidos por la imposición fiscal.

De forma más general y en tanto subsista la situación de crisis por que atraviesa la agricultura, se impone disminuir la presión tributaria que soporta el campo. Existe una contradicción flagrante entre la descapitalización de la empresa agraria, reconocida unánimemente, y el peso de los impuestos de todo tipo que el campo tiene que sopor-

tar. A la hora de pagar impuestos, el régimen trata a los agricultores como si fueran millonarios.

Debe ponerse término a las revisiones constantes e infundadas de los líquidos imponibles y disminuirse aquellos que han sido abusivamente incrementados en los últimos años y suprimirse la contribución urbana sobre los edificios que forman parte de la explotación campesina.

5 *Recursos financieros para el campo.*

La agricultura ha venido financiando, no sólo los grandes negocios de la oligarquía, sino el lujo y el parasitismo de las clases dominantes. En el último período, dentro de las inversiones totales, disminuye cada día más la parte destinada al campo. Si hace todavía unos años, de cada 100 pesetas invertidas, sólo doce lo eran en la agricultura, en 1966 éstas han quedado reducidas a ocho.

Es la evidencia misma que es preciso poner término a esta situación multiplicando los recursos que se destinan al campo.

En las condiciones de descapitalización hoy prevalentes, la escasez y la carestía del crédito oficial; las condiciones leoninas y los elevados intereses del crédito bancario, sólo conducen a endeudar todavía más a los campesinos.

Los campesinos necesitan, por el contrario:

Crédito oficial, abundante, a largo plazo y con un interés no superior al tres por ciento, simplificándose al máximo los trámites para obtenerlo y no exigiendo otra garantía que la honradez atestiguada por los propios campesinos.

En el caso de explotaciones familiares y de cooperativas auténticamente campesinas, cuando se trate de inversiones destinadas a la mejora de las explotaciones, adquisición de maquinaria y de ganado, construcción de locales y viviendas, etc., además del crédito oficial se impone subvencionarlas a fondo perdido.

6 *Solución del problema del agua.*

En extensas zonas de regadío, el agua constituye un grave problema.

El exorbitante precio del agua grava seriamente la economía campesina, alimentando una de las formas más parasitarias de propiedad: la del agua.

La discriminación en el riego, producto de la ausencia de democracia en las Comunidades de Regantes donde, en algunos casos, todavía se vota de acuerdo con las hectáreas que el regante posee (lo que permite a los terratenientes todo tipo de arbitrariedades), disminuye los efectos del regadío para los modestos campesinos.

Un ejemplo patente del escándalo del agua lo constituyen las Islas Canarias. Allí los campesinos tienen que pagar por el agua hasta un 60 % del total de gastos de la cosecha. Los cultivadores isleños tienen que sufrir, como una plaga más, a los dueños del agua y a toda una serie de intermediarios que, poniendo en práctica infinidad de trucos para burlar las prácticamente inexistentes tasas del agua, se llevan la mayor parte de los ingresos campesinos.

El agudo problema de la escasez de agua podría resolverse si el Gobierno dedicara recursos a Canarias. Con el dinero que se ha gastado, sólo este año, en importar maíz y cebada, se hubiera cubierto doce veces el presupuesto del plan de embalses de las Islas; plan que apenas está iniciado.

Una de las necesidades más sentidas del campo canario es la instalación de la planta potabilizadora y la estación depuradora de aguas residuales.

Es necesario luchar para que los pozos y galerías, así como las presas y embalses particulares, cuyas aguas son objeto de especulación, sean controladas por Comisiones Campesinas de Regantes encargadas de la distribución y la venta del agua, eliminando así a los intermediarios parasitarios.

7 Protección y ayuda a las explotaciones ganaderas campesinas.

Por medio de: medidas a cargo del Estado para la mejora y regeneración del ganado; empréstitos a bajo interés para el mejoramiento de las instalaciones y de los pastizales; seguro de ganado; subvenciones para la adquisición de piensos; erradicación de las epizootias e indem-

nización completa del ganado sacrificado a estos fines; supresión del impuesto sobre la ganadería independiente.

8 *Mejora de la Seguridad Social Agraria.*

Una y otra vez se promete al campo la equiparación del régimen de seguridad social agraria con el régimen general y una y otra vez esta profunda aspiración campesina se ve burlada por las decisiones del Gobierno, como se ha puesto de manifiesto con la nueva Ley de Seguridad Social que ha entrado en vigor a principios de año.

Es preciso luchar por la equiparación efectiva, comenzando por el Subsidio de Vejez e Invalidez, el Subsidio Familiar y el Seguro de Enfermedad. Particularmente urgente es la mejora radical de la asistencia médica y sanitaria en el campo.

Para los obreros agrícolas es vital el establecimiento de un seguro de paro equivalente al 75 % del salario real.

9 *Es urgente modernizar la vida rural.*

El hecho de que nuestro campo se está quedando sin toda una generación, expulsada por el atraso, la miseria y la incultura, pone bien de relieve la urgencia de tomar medidas para mejorar la vida rural si queremos impedir que también huya del campo la generación que ahora crece.

Asegurar la enseñanza general y verdaderamente gratuita para todos los niños, lo que implica la construcción de las escuelas necesarias, así como la elevación del sueldo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los maestros rurales; la enseñanza profesional y técnica para la juventud campesina; el desarrollo de instituciones culturales, deportivas y recreativas de todo tipo que humanicen la vida en el campo.

Destinar los recursos necesarios a la mejora de carreteras y caminos, al abastecimiento de agua y electricidad, comunicaciones telefónicas, etc.

Exigir el funcionamiento democrático de los municipios, que implica se rindan cuentas al pueblo de todas las actividades que interesan a la vida de los mismos.

El desarrollo del movimiento campesino

El régimen franquista ha llevado a los campesinos ante este dilema: o luchar siguiendo el ejemplo de los obreros y de los estudiantes, o resignarse a ser arruinados, a ver destruidos sus hogares, a abandonar sus pueblos y aldeas para emprender el penoso camino del éxodo.

A los comunistas, que siempre hemos estado y estamos al lado de los campesinos compartiendo sus penalidades y sus esperanzas, no nos sorprende verles incorporarse cada vez más resueltamente a la lucha en defensa de sus intereses.

El movimiento campesino está en marcha. Aún no ha alcanzado la fuerza necesaria, pero sus acciones empiezan a influir seriamente en la situación política nacional. El año 1966 ofrece una serie de experiencias valiosas cuyo estudio ayudará a fortalecer su organización, su unidad y cohesión y lograr así una mayor eficacia en sus futuras acciones.

La idea de que la tierra tiene que ser para quienes la trabajan empieza a estar presente en las acciones de los obreros agrícolas, condenados al paro forzoso gran parte del año; en las acciones de los arrendatarios y aparceros, agobiados por el peso de unas rentas insoportables; en las acciones de los campesinos a quienes se empuja por todos los medios a abandonar las tierras que han cultivado de generación en generación.

La reivindicación de la tierra para el que la trabaja se entrelaza cada vez más con otras reivindicaciones de los

trabajadores del campo. En las luchas diarias de los obreros agrícolas y de los campesinos está el punto de partida para promover un amplio movimiento de masas capaz de imponer la solución del problema de la tierra y de todos los problemas planteados en el agro español.

En los últimos años, la lucha de los obreros agrícolas por mejores salarios ha adquirido gran amplitud y en vastas zonas ha logrado resultados importantes. Apoyándose en esto, hay quienes gritan que "los salarios en el campo son excesivamente elevados", silenciando dos hechos fundamentales. El primero es que cientos de miles de obreros agrícolas carecen de trabajo gran parte del año, así como de un seguro de paro. El segundo, es que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando las faenas son realizadas por mujeres, jóvenes y niños, sigue pagándose el mísero salario mínimo, e incluso menos, según han reconocido los propios jefes de las Hermandades.

Las dificultades de los campesinos —no de los terratenientes— para pagar salarios decentes, son reales. Pero hace falta comprender, y muchos campesinos lo comprenden, que esas dificultades no pueden desaparecer regateando a los obreros agrícolas lo que justamente les corresponde por su trabajo.

Ni que decir tiene que los obreros agrícolas necesitan luchar a brazo partido *por el aumento de los salarios; por la aplicación efectiva del principio legalmente reconocido de "a igual trabajo, igual salario" para hombres, mujeres y jóvenes; por un seguro de paro equivalente al 75 % del salario real; y por la entrega inmediata de las tierras mal cultivadas o abandonadas, así como de la ayuda necesaria para trabajarlas.*

Ante la angustiosa situación de los trabajadores del campo, condenados al paro forzoso gran parte del año, las autoridades se encogen de hombros diciendo que no hay dinero.

Ahí están esperando brazos que las trabajen, no sólo una buena parte de los grandes latifundios en las tierras de secano, sino incluso muchas tierras puestas en riego con los dineros del pueblo.

La mayor parte de estas tierras de regadío están siendo dedicadas a cultivos extensivos. Los latifundistas han

demostrado su incapacidad para extraer de ellas todo lo que podrían dar, cultivadas racionalmente. En muchos casos, las arriendan, lo que les proporciona millones de pesetas de renta parasitaria pagada por los campesinos, que viven y trabajan en situación parecida a la de los siervos. En esa misma situación se encuentran los colonos dependientes del Instituto Nacional de Colonización.

La entrega de esas tierras a los obreros agrícolas y a los campesinos, el acceso inmediato de los colonos a la propiedad, no sólo contribuiría a reducir el paro, sino que reportaría grandes beneficios al país.

En algunos pueblos ha surgido a este respecto una iniciativa que merece ser seguida. Se trata de elaborar pliegos en los que se indica, de un lado, las fincas que se hallan en las condiciones antedichas y, de otro lado, la relación de obreros agrícolas en paro forzoso, de arrendatarios, aparceros y campesinos que no tienen tierra suficiente. En la elaboración de estos pliegos participan otras personas de los pueblos que, aun no siendo obreros agrícolas ni campesinos, están en condiciones de ayudar con sus conocimientos.

Es una forma de plantear el problema del paro y su solución en términos que ninguna persona honrada puede rechazar. Pero lo decisivo es la acción unida y resuelta de los trabajadores, sin la cual el Gobierno y las autoridades provinciales y locales seguirán encogiéndose de hombros. Cuando se ven acosadas, las autoridades intentan salir del paso dando unos jornales de limosna a unos cuantos. Es necesario responderles como lo han hecho en Sanlúcar de Barrameda, en La Rinconada, en Brenes y en otros pueblos de Andalucía: Queremos trabajo inmediatamente y para todos. La firmeza de estos trabajadores, presentándose en masa en los tajos y poniéndose a la tarea sin más trámites, se ha visto recompensada con el salario arrancado para todos.

Hay que tener en cuenta que las cantidades que el Gobierno dedica a remediar el paro son insignificantes y no pueden resolver el problema ni siquiera en parte. Por añadidura, al pasar por las manos de gobernadores, caciques y burócratas sindicales, esas cantidades, en la mayor parte de los casos, se evaporan antes de llegar a convertirse en

jornales. Por eso hay que orientarse cada vez más a exigir la entrega de la tierra mal cultivada, donde los brazos de los trabajadores puedan ocuparse permanentemente.

En el curso de estas luchas se va reforzando la organización, van destacándose auténticos dirigentes obreros, incorruptibles frente a las añagazas de las autoridades, firmes ante los patronos y fieles a los intereses de su clase.

Sin que se hayan generalizado aún, como en los centros industriales, lo cierto es que las Comisiones Obreras son el alma de la lucha en numerosos pueblos. Son las Comisiones Obreras las que presentaron sus candidatos en las elecciones sindicales frente a los verticalistas, logrando resultados importantes.

Hoy en día, no pocas de las Secciones Sociales de las Hermandades están en manos de trabajadores revolucionarios. Y no sólo en el plano local, sino en el provincial. Esos puestos conquistados en las pasadas elecciones sindicales están desempeñando un papel importante en el desarrollo de la lucha de las masas en el campo. Se trata de defenderlos y de aprovecharlos con inteligencia y audacia, sin dejarse llevar al terreno del legalismo verticalista.

La acción de las Comisiones Obreras debe combinarse con la actuación de los representantes de los trabajadores en las Secciones Sociales. Todo ello de manera abierta, recabando siempre la opinión del conjunto de los trabajadores y combatiendo todo intento de abordar las cuestiones de espaldas a éstos. El movimiento se demuestra andando y la democracia se aprende practicándola en todas las acciones de los trabajadores.

De esta manera, los obreros agrícolas van creando una organización que les permite pasar a grandes acciones y que en su desarrollo puede constituir el armazón de su futuro sindicato unitario, democrático e independiente.

Esta organización hay que continuar consolidándola y desarrollándola, no sólo a escala local, sino provincial.

Ahora bien, en aquellos pueblos en los que los componentes de las Secciones Sociales no están dispuestos a defender los intereses de sus compañeros, las Comisiones Obreras deben obligarles a que lo hagan o a que dimitan.

En todo caso, los obreros agrícolas, donde encuentren resistencia en la Sección Social, deben saltar por encima de ella, exigiendo asambleas en las Hermandades, en las que se discutan y resuelvan los problemas que tengan pendientes.

Las concentraciones y las manifestaciones son imprescindibles en los pueblos para imponer a los organismos oficiales, a los terratenientes, las reivindicaciones acordadas por los obreros en esas asambleas democráticas.

En los últimos tiempos se vienen produciendo múltiples acciones campesinas en defensa de sus tierras lo que demuestra que su paciencia está llegando a un límite. Ahí está el ejemplo de los campesinos de Castrelo de Miño, defendiendo sus tierras frente al poderoso monopolio de FENOSA; el de los campesinos leridanos, a quienes se quiere obligar a pagar unas tierras que en realidad les pertenecen; el de los campesinos de Sástago, a quienes un conde salido de ultratumba ha pretendido despojar de unas tierras que han sido pagadas ya cien veces con el sudor de los que las trabajan. Ahí está la acción de los campesinos de Sádaba a quienes se les han robado las tierras que trabajan "desde tiempo inmemorial"; la protesta de los campesinos de Mequinenza y de Ribagorza de Ebro, cuyas tierras han sido inundadas por las aguas de las presas y a quienes se quiere hacer callar con una mísera indemnización. En análoga situación se encuentran los campesinos de Santiago del Monte, obligados a vender sus tierras para la construcción del aeropuerto de Rañón y a los que aún no se les ha pagado un céntimo. Los tres mil habitantes de Valdegruge, en Albacete, viven momentos de angustia ante el peligro de que la tierra que trabajan, perteneciente a la Iglesia, les sea arrebatada. Doscientas familias de Alcalá de Ebro y Torres de Benelón (provincia de Zaragoza) luchan por adquirir en propiedad las tierras que trabajan pertenecientes a la aristocracia. Seiscientos campesinos del Concejo de Tineo (Asturias), encabezados por la comisión de vecinos creada en una gran asamblea, luchan en defensa de sus tierras que el "Distrito Forestal" intenta arrebatárselas.

En toda España es conocida la valiente lucha de los campesinos ganaderos de Asturias y Santander. Esta lucha

ha estado y, de hecho, sigue estando planteada en los siguientes términos: de un lado, los campesinos, rodeados de la simpatía de los obreros y de todo el pueblo; de otro lado, las empresas monopolistas, respaldadas por el Gobierno.

Los campesinos de Asturias celebraron importantes Asambleas en las Hermandades para plantear sus reivindicaciones —el aumento del precio de la leche— y recurrieron a una gran acción que se hizo popular en todo el país bajo el nombre de “la huelga de la leche”; huelga que se extendió a zonas de Lugo y León. Sin llegar a la huelga, la acción adquirió gran amplitud y combatividad igualmente en Santander. En esta provincia desempeñaron y siguen desempeñando un importante papel los “Grupos de Aportadores de Leche”, asociación independiente de los campesinos que las autoridades tuvieron que reconocer de hecho.

Esta lucha, mantenida durante meses, terminó con el triunfo. Las empresas monopolistas se vieron obligadas a pagar el precio exigido por los campesinos.

Los progresos del movimiento campesino se han visto igualmente reflejados en las asambleas organizadas por los viticultores de una serie de pueblos de Toledo, Ciudad Real y otras provincias. Aquí los campesinos han tomado en sus manos la defensa de sus intereses, reuniéndose por propia iniciativa y sin intromisiones extrañas. En estas asambleas se han discutido los graves problemas planteados en el sector vitivinícola; se ha denunciado a la Comisión de Compras de Excedentes por el incumplimiento de sus obligaciones; se ha defendido el precio de la uva y otras reivindicaciones. Allí donde los viticultores se han reunido en asambleas, donde se ha protestado, han logrado el respeto del precio oficial de sostén de la uva, de 2,62 ptas/kilo, o, al menos, que no caiga tan bajo como allí donde ha faltado esta acción.

Otro terreno en el que la lucha de los campesinos está adquiriendo gran desarrollo son las cooperativas. En España existen cooperativas denominadas agrícolas, pero son raras las que pueden considerarse como auténticamente campesinas. Bajo el régimen franquista el “cooperativismo” adolece de los mismos defectos que todas las organizaciones oficiales relacionadas con el campo. Con algunas excep-

ciones, las cooperativas están manejadas por los terratenientes, capitalistas y altos funcionarios. Son, por lo mismo, instrumentos no de defensa, sino de expoliación de los campesinos. Peor aún, en muchos casos, estas llamadas "cooperativas" son poderosos tentáculos del capital monopolista y vías por las que penetra el capital extranjero.

Uno de esos tentáculos monopolistas es la llamada C.O.E.S., manejada por financieros y personajes del régimen. Las relaciones entre ese gran tinglado de la comercialización de los productos del campo y los campesinos son las que existen entre la sogá y el ahorcado.

El poder de los monopolios ha realizado el "milagro" de que la simplísima operación de embotellar el vino dé más dinero que el cultivo de la uva y su elaboración. Al mismo tiempo que "bautizan" el vino, las embotelladoras se bautizan a sí mismas con el nombre de "cooperativas". También suelen llamarse "cooperativas" los envasadores de aceite, ciertas desmotadoras algodonerías, otros tantos grandes negocios que se realizan a costa de los agricultores y los consumidores.

Tales son algunos de los intermediarios contra los que claman las gentes del campo.

Nosotros partimos de que sin un cambio de régimen no es posible resolver los graves problemas de nuestra agricultura. Pero es evidente que, incluso en las presentes condiciones, las cooperativas pueden ser, y en ciertos casos lo están siendo ya, un medio eficaz de defensa de los intereses de los campesinos.

De ahí la necesidad de luchar por un movimiento cooperativista auténticamente campesino, democrático e independiente del Estado y de los Sindicatos Verticales.

Una de las tareas más importantes que los campesinos han empezado a abordar en el movimiento cooperativista es el conseguir la elección democrática de todos los cargos en el plano local, provincial y nacional.

Y esto sólo es posible luchando en cada cooperativa, batiéndose contra todos los que pretenden mangonearla desde dentro o desde fuera, exigiendo que todos los problemas sean discutidos y decididos democráticamente por las asambleas.

Años atrás, éstas y otras muchas cosas eran punto menos que imposibles. Hoy, si bien nada es fácil, todo es posible. Los infinitos tinglados montados para exprimir al campesino sufren la misma descomposición que la dictadura que los mantiene.

En el interior mismo de las Hermandades se expresa a diario la oposición a la nefasta política agraria del régimen, por parte de muchas personas que ocupan puestos de dirección en las juntas locales y provinciales, e incluso a nivel nacional.

Cierto que por su carácter corporativo y por la composición de sus órganos de dirección, las Hermandades no son la organización idónea para la defensa de los intereses de los obreros agrícolas y los campesinos. Eso está comprobado. Más aún, muchas de las reivindicaciones de los capitalistas agrarios y de los terratenientes, aprobadas en sus asambleas, han ido a morir en las papeleras del Gobierno, lo cual pone en evidencia que la política franquista sirve, *ante todo*, los intereses de los monopolios capitalistas.

¿Cuál es la actitud de las altas jerarquías? Si se les juzga por sus actos y no por sus palabras, puede verse a diario que prefieren la catástrofe de la agricultura al enfrentamiento con el régimen que la provoca.

Pero esa vergonzosa sumisión no es compartida ni siquiera por todos los capitalistas agrarios y terratenientes. Expresando la indignación de muchos de ellos, el Conde de Montarco insiste en la necesidad de pasar de las palabras a la acción. Independientemente de lo que pueda haber de desahogo verbal, esto indica que, no sólo entre los campesinos, sino también en otros sectores del agro se abre camino la idea de que para obligar al Gobierno a retroceder es necesario proceder como proceden los agricultores en otros países; la idea de que hace falta salir a la calle en manifestación.

En estas condiciones, toda iniciativa tendente a desarrollar la acción en defensa de la agricultura sería bien acogida por el pueblo y, en primer lugar, por los obreros agrícolas y los campesinos. Lo que éstos no pueden aceptar es que sigan hablando en su nombre quienes no han hecho y no hacen más que hundirles en la ruina.

Los campesinos necesitan destacar de sus filas dirigentes capaces de representarles, de hablar en su nombre, de plantear sus reivindicaciones y encabezar la lucha para hacerlas triunfar.

En las pasadas elecciones sindicales se dieron pasos importantes en este sentido. Una parte de los caciques locales y provinciales que habían venido manejando las Hermandades en su provecho, fueron desplazados de los puestos de dirección. En Valencia, más del 60 % de los presidentes no fueron reelegidos y algo parecido ocurrió en otras provincias. Sin exagerar la importancia de estos cambios, hay que apreciar como un hecho positivo la voluntad de renovación que se ha manifestado entre los campesinos. Los puestos conquistados por éstos en las Hermandades pueden y deben utilizarlos para combatir más eficazmente de lo que se ha hecho hasta aquí la política anticampesina del régimen.

Ahora bien, el movimiento campesino es una gran fuerza que requiere órganos de dirección propios e independientes. Estos órganos pueden ser, y en no pocos lugares lo están siendo ya, las comisiones campesinas.

Si los trabajadores industriales no hubieran creado las comisiones obreras, su lucha no habría alcanzado la amplitud y la cohesión de que da prueba. Y, sin esta lucha, los salarios seguirían tan congelados como los precios pagados al campesino por sus productos. Aprendiendo de esta experiencia, los campesinos pueden crear sus propias comisiones para organizar y dirigir la acción en defensa de sus intereses. Se trata, naturalmente, de comisiones formadas por campesinos y no por terratenientes, capitalistas y burócratas a su servicio. En dichas comisiones deben estar los hombres que se distinguen por su honradez, por su comprensión de los problemas y por su combatividad. Las comisiones campesinas deben actuar abiertamente, puesto que todo lo que tienen que defender es lícito, recabando en su labor el apoyo de todos los elementos sociales, maestros, médicos, artesanos, comerciantes, etc., interesados en la solución de los problemas del campo.

Junto a las reivindicaciones particulares de los obreros agrícolas y de los campesinos, en el campo hay otras muchas que conciernen al conjunto de la población rural. Está la falta o la insuficiencia de escuelas y de maestros;

la situación intolerable de la sanidad y la higiene; el estado ruinoso de infinidad de viviendas; el abandono de la urbanización de los pueblos y aldeas, en muchos de los cuales falta o escasea el agua; las deficiencias de las carreteras y caminos vecinales, así como de los medios de transporte. En infinidad de pueblos no hay más lugar de esparcimiento para los campesinos que la taberna; cuando hay una sala de cine, es para mostrar, con rarísimas excepciones, las mayores estupideces producidas dentro y fuera de España. Son otros tantos motivos que, unidos a la ruina de los campesinos y al paro obrero, empujan a la juventud a huir del campo.

En torno a estos problemas deben crearse comisiones de vecinos capaces de movilizar al conjunto de la población. Su necesidad es tanto más acuciante cuanto que los Ayuntamientos, las Diputaciones, los Gobiernos Civiles, es decir, todos los órganos del Estado franquista, manifiestan su incapacidad para resolver dichos problemas.

Los ultras del régimen tienen la tendencia a convertir en un problema de orden público cualquier acción de los campesinos en defensa de sus legítimos intereses. Pero todo el mundo sabe que quienes están creando una situación peligrosa no son los campesinos, sino quienes les empujan a la miseria y a la desesperación. Los problemas del campo no son problemas de orden público, sino problemas económicos y sociales que pueden y deben ser resueltos pacíficamente. Ni la Guardia Civil ni ninguna fuerza de orden público tienen por qué intervenir contra la acción pacífica de los campesinos en defensa de sus reivindicaciones. La conducta ecuaníme observada por la Guardia Civil en algunos casos aislados debería servir de ejemplo para toda esta institución que compromete su futuro sosteniendo privilegios irremisiblemente condenados a desaparecer.

¿Qué puede haber de anormal en que los campesinos se reúnan para examinar sus problemas? Ya es hora de que puedan reunirse libremente en los locales de las Hermandades, contruidos y mantenidos con su dinero, en las parroquias, en las salas de los Ayuntamientos o, si todas estas puertas se les cierran, en la plaza pública

En Francia y otros países capitalistas no obstante disfrutar la agricultura de una protección de la que carece

en nuestro país, cuando los campesinos sienten lesionados sus intereses, salen a la calle en manifestación para obligar a los poderes públicos a satisfacer sus demandas.

En España, robar al agricultor, asarle a impuestos, obligarle a comprar caro y a vender barato, es lo legal y correcto. En cambio, hay quienes presentan como "ilegal" y hasta "subversivo" el que los campesinos se defiendan. Es la "ley del embudo" con la que ninguna persona honrada puede estar de acuerdo.

No están de acuerdo, por supuesto, los campesinos a quienes no les faltan ganas de defenderse ni decisión para ello. Lo que les falta es experiencia de lucha en estas condiciones y la necesaria organización. La experiencia la están adquiriendo y la organización la están creando paso a paso. Quienes dudan hoy de la capacidad combativa de los campesinos, suelen ser los mismos que dudaron ayer de la capacidad combativa de la clase obrera. El movimiento campesino sigue, con sus características propias, el camino trazado por el nuevo movimiento obrero.

Ayudar a los campesinos a defender sus intereses no es sólo un deber de solidaridad; es, ante todo, un aspecto esencial de la lucha por la democracia.

Esta ayuda debe prestarla, en primer lugar, el nuevo movimiento obrero, ligado al campo por infinitos lazos familiares y amistosos. Transmitiendo a los campesinos sus experiencias de unidad, de organización y de lucha, las Comisiones Obreras contribuirán a que éstos vean prácticamente que los obreros son sus mejores amigos. Y, por consiguiente, a que las luchas obreras encuentren un calor y un apoyo cada vez más unánime y resuelto de parte de los campesinos.

Los estudiantes, los intelectuales, los diversos sectores profesionales, en una palabra, todos los movimientos democráticos deben incluir hoy en día, entre sus tareas, ayudar a los campesinos a salir de la angustiosa situación en que les ha situado el régimen.

Desarrollar y fortalecer el movimiento campesino tiene que ser una preocupación constante de todas las fuerzas políticas y sociales interesadas en el progreso de nuestro país.

Nuestros campesinos son víctimas de una injusticia que clama al cielo. Ninguna persona con sentido del interés nacional puede permanecer indiferente ante esa injusticia.

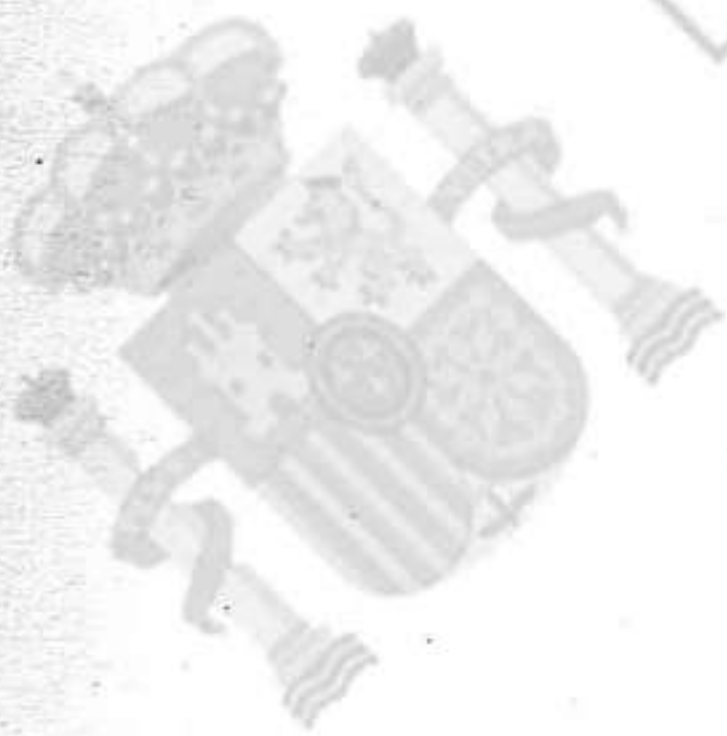
Los comunistas hemos arrojado los mayores sacrificios en defensa de los hombres y mujeres del campo, explotados y humillados por el franquismo. Otras fuerzas democráticas a su manera en el mismo sentido. Pero la situación del campo exige un esfuerzo mayor, una acción unida y coordinada de todas las fuerzas progresivas del país.

En este grave problema nacional son muchos y muy importantes los puntos de coincidencia entre las diversas fuerzas y movimientos democráticos.

La plataforma reivindicativa que hemos expuesto, abierta a la discusión, expresa nuestro deseo sincero de luchar unidos a todos los que, cualquiera que sea su credo político o religioso, estén dispuestos a defender los intereses de los campesinos.



MINISTERIO
DE CULTURA



INDICE

La incorporación de los campesinos a la lucha por la democracia	pág. 1
<i>Urge una profunda reforma agraria basada en el principio : « La tierra para quienes la trabajan »</i>	pág. 3
<i>Ningún sector campesino escapa a la crisis</i>	pág. 5
Reivindicaciones inmediatas de los campesinos ..	pág. 13
El desarrollo del movimiento campesino	pág. 19